

# Las Instituciones de la Democracia y sus Contradicciones

**Gonzalo D. Martner**

Académico, Facultad de Administración y Economía de la  
Universidad de Santiago de Chile

Correo Electrónico: [Gonzalo.martner@usach.cl](mailto:Gonzalo.martner@usach.cl)

## RESUMEN

*La democracia es considerada como el sistema político más aceptable para regir el destino de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, persisten una serie de contradicciones en el funcionamiento de las instituciones que la conforman y que distorsionan su capacidad de representación. Este artículo tiene como objeto caracterizar analíticamente algunos de los dilemas que enfrenan las democracias.*

La democracia ha avanzado universalmente en extensión y legitimidad, incluyendo a América Latina desde los años ochenta y recientemente el mundo árabe, pero en ninguna parte estos procesos están exentos de ambigüedades y contradicciones. En el panorama actual de América Latina se desenvuelven procesos políticos fuertemente heterogéneos y algunos de ellos de alta conflictividad política (Venezuela, Colombia) y social, incluyendo la irrupción de sectores medios y populares en movilizaciones de calle de mayor frecuencia, intensidad y visibilidad que en el pasado reciente (en Chile, México, Argentina, Perú, Bolivia, Brasil) y que no necesariamente se sincronizan ni compatibilizan con las movilizaciones electorales que configuran periódicamente el poder público, pero en un contexto general de no cuestionamiento de la democracia. En Europa, en medio de la mayor crisis desde 1929, las democracias no han sufrido derrumbes, pero sí han sido desafiadas por la movilización en el espacio público urbano, especialmente en países como Grecia y España, con alguna derivación hacia Estados Unidos. Lo que ocurre

en los países árabes es todavía muy reciente como para ser evaluado, en especial el nexo entre la soberanía popular y el carácter teocrático que la electoralmente influyente vertiente religiosa islamista procura imprimirle al Estado. En este contexto, caracterizar analíticamente algunos de los dilemas actuales de las democracias modernas es el objeto de estas notas.

## **La democracia como ideal del autogobierno y la autonomía política colectiva**

La democracia es el ideal del autogobierno del pueblo y goza de legitimidad como el sistema político más aceptable para regir las sociedades contemporáneas, donde las personas sean libres de interferencias indebidas de otros y las instituciones sean la expresión de la soberanía popular, de la igualdad ante la ley y del gobierno de las mayorías con respeto de las minorías, es decir donde “los más tienen derecho a mandar, pero en el respeto de los derechos de la minoría” en la expresión de Giovanni Sartori (2009), incluido su derecho a procurar transformarse en mayoría. La democracia es el contraste con la tiranía o el despotismo (términos de origen griego) o bien con la dictadura (término de origen romano) y más tarde con el absolutismo de las monarquías de derecho divino y con los regímenes de fuerza de carácter autoritario o totalitario. Es, en suma, lo contrario de la autocracia y, en palabras de Cornelius Castoriadis (2010), “la conciencia explícita de que nosotros creamos nuestras leyes y por tanto nosotros podemos cambiarlas también” e instituye a ese título la autonomía política colectiva.

Las asociaciones democráticas (Dahl, 2006) son aquellas que reúnen ciertas características: participación efectiva con oportunidades iguales de los miembros de la asociación para dar a conocer los puntos de vista antes de que se adopte una política; igualdad de voto; comprensión ilustrada, con oportunidades iguales para instruirse sobre las políticas alternativas relevantes y sus consecuencias posibles; agenda de políticas siempre abierta a cambios; inclusión de todos los adultos. Las instituciones de la democracia en gran escala incluyen el que los responsables públicos sean escogidos en elecciones libres, imparciales y frecuentes, con libertad de expresión, fuentes alternativas de información, autonomía de las asociaciones y ciudadanía inclusiva. En la mayoría de los países democráticos los derechos políticos formales son casi universales,

la vida política es organizada por los partidos, las elecciones son competitivas y la oposición tiene una oportunidad razonable de vencer. Tanto los gobiernos como las oposiciones observan por los menos las reglas básicas de la democracia. La valoración de la democracia se nutre, a su vez, de ciertos atributos : está llamada a evitar la tiranía, garantizar derechos fundamentales, permitir un alto grado de igualdad política, extender una cultura de libertades, ayudar a las personas a perseguir sus propios intereses y a autodeterminarse. Además, las democracias modernas tienden a no hacerse la guerra entre sí. Norberto Bobbio (1986) subraya el sentido de la democracia con énfasis procedimental y pone el acento en que su tarea principal es establecer determinadas reglas del juego que eviten la resolución violenta de conflictos. Ese carácter procedimental se expresa en la dimensión de elección periódica de las autoridades mediante el sufragio universal y en la de régimen de libertades y de garantía de derechos civiles y políticos con separación de poderes, pero su tercera vertiente se ocupa de discutir la extensión mayor o menor de derechos económicos, sociales y culturales y remite a aspectos programáticos de la organización social que son irremediamente parte de la autonomía política colectiva que instituye la democracia.

Los países que adoptan la democracia como sistema político logran en numerosos casos por esa vía ser más estables e innovadores y tienden a ser más prósperos<sup>1</sup>. La democracia, y la extensión de derechos que supone junto a la ampliación de los grados de incertidumbre en la determinación de las decisiones públicas que le es consustancial, no es entonces sinónimo sistemático de expansión exponencial de gastos y regulaciones promovidas por grupos de interés y la consiguiente disminución de la prosperidad colectiva, como lo señalan sus detractores neoliberales a la Von Hayek.<sup>2</sup> Al revés, el crecimiento es mayor con entornos políticos y sociales que favorecen la innovación y con empresas más productivas, las que solo pueden serlo con instituciones que apoyen al margen del mercado la productividad de sus recursos humanos y, por tanto, su educación, su salud y su capacidad de enfrentar episodios de crisis, así como apoyen la infraestructura y la investigación y desarrollo. Es decir con un Estado inversor, regulador y asegurador que produzca

---

1 Alesina y Perotti (1994) y Persson y Tabellini (2007).

2 Friedrich von Hayek llegó a sostener que “mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un Gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente”, El Mercurio (12-4-1981), en consonancia con su tesis de que el Estado de Bienestar es un “camino de servidumbre”.

“externalidades” socioeconómicas que las empresas o los individuos privados no “internalizan” al tomar sus decisiones de inversión (Aghion y Roulet, 2011). Nada de esto puede hacerse sin instituciones públicas, y para evitar que actúen arbitraria y anquilosadamente más vale que estén sujetas al control de poderes democráticos.

De acuerdo a Habermas (2009) se ensamblan tres elementos como núcleo normativo de los Estados democráticos de derecho modernos (con sus respectivas tradiciones de pensamiento político: la liberal, la republicana, la deliberativa). Primero, **la autonomía privada de los ciudadanos**, que tienen derecho a llevar una vida autodeterminada, con protección de la esfera privada mediante un sistema de libertades básicas iguales solo restringidas por los derechos a la libertad de los demás (principio del derecho de Kant), en base al acceso a tribunales independientes que otorgan a todos la misma protección jurídica, con separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial para garantizar la sujeción de la administración pública al derecho y a la ley. Segundo, **la ciudadanía democrática** como inclusión de ciudadanos libres e iguales en la comunidad política, que se encarga de la participación política de tantos ciudadanos interesados como sea posible mediante iguales derechos a la asociación, a la participación y la comunicación; elecciones periódicas y referéndums con base electoral inclusiva e igualitaria, competencia entre partidos, plataformas y programas; principio de mayoría en los cuerpos representativos. Tercero, **la esfera pública independiente**, en la que concurre la libre formación de la opinión y de la voluntad, que vincula al Estado y la sociedad civil, con libertad de prensa e información, pluralidad de medios, garantía de acceso a la información y a los foros de la comunicación pública.

Pero más allá de estas consideraciones generales, no debemos olvidar que la democracia tal como la conocemos hoy es un producto histórico y que su evolución futura será fruto de la resolución en un sentido u otro de las contradicciones y conflictos que enfrenta en la actualidad.

Las instituciones representativas modernas se originan hacia fines de la edad media en Europa, cuando en Inglaterra y Polonia (en 1493) empieza a aparecer una combinación de cámaras legislativas elegidas sobre la base del sufragio individual (aún restringido) y ya no de corporaciones, separándose las funciones ejecutivas de las legislativas y con poder de las legislaturas de convocarse a sí mismas (aunque pudiesen ser disueltas) y de ejercer un poder fiscal y tributario. Es sin embargo fuera de Europa, en 1776 en Estados Unidos

luego de la guerra de independencia, que se produce la primera aparición más o menos completa de instituciones de este tipo. Luego vivieron procesos semejantes Francia en 1789 y España en 1812 y se constituyeron en modelos para América Latina en sus procesos de independencia y para Europa, empezando por Noruega en 1814. No siempre duraron mucho, pero sobrevivieron y reaparecieron hasta consolidarse lentamente, especialmente en los países que se fueron haciendo más prósperos. Durante más de un siglo existieron luchas y desgarros en torno a la inclusión de todas las clases sociales y del género femenino en el sufragio. Una vez que los varones pobres obtuvieron su inclusión en la condición ciudadana, la política pasó a ser organizada por partidos, de entre los cuales los representantes de las clases propietarias procuraron restringir su impacto mediante reglas manipulables de participación electoral y/o directamente mediante fraude. Los derechos políticos de las mujeres vinieron más tarde, luego de sostenidas luchas, no sin el supuesto, en diversos casos que favorecieron el cese del veto de los sectores dominantes, de que el voto femenino sería más conservador que el voto popular masculino. Así, en medio de luchas sociales y políticas prolongadas, las instituciones representativas han ido evolucionando hacia lo que ahora llamamos democracia. Los diseños fueron variados y dieron más fuerza al ejecutivo o al legislativo, consagrando la disputa por el poder político a través de elecciones, con un retroceso progresivo de los regímenes de partido único, acelerado después de la caída del muro de Berlín en 1989.

La democracia ha aumentado su extensión, de acuerdo a Dahl (2006), desde solo un caso entre 35 naciones en 1860, a 25 entre 75 en 1950 y a 65 entre 192 al finalizar el siglo XX. En 2012, según The Economist Intelligence Unit, y a pesar de la “primavera árabe” y su oleada de revoluciones democratizadoras, existen aún más regímenes autoritarios que democráticos. Entre 167 países (se excluyen los mini-Estados, con los que se llega a 193 miembros de Naciones Unidas, aceptados por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad) solo existen 25 con democracia plena y 54 con democracia deficiente, mientras hay 51 con regímenes autoritarios. Sumados los países con democracias plenas y deficientes (79) son menos que los países con regímenes autoritarios e híbridos (88). Así, menos de la mitad de la población mundial vive en democracia, siendo la India la mayor democracia en el mundo por el número de ciudadanos que participa en ella y China el régimen autoritario que mantienen a la más numerosa población bajo su sujeción.

## ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?

Como producto históricamente determinado, la democracia, junto a los atributos reseñados, es un sistema político con limitaciones y contradicciones. En el ideal original del autogobierno las personas son libres porque cuando el pueblo gobierna nadie obedece más que a sí mismo. En la práctica, siguiendo a Przeworski (2010), las personas no se gobiernan a sí mismas ni pueden gobernar todos al mismo tiempo. La situación más frecuente del individuo es la de ser gobernado. Habiendo preferencias heterogéneas, muchos deberán vivir, al menos temporalmente, bajo leyes que no son de su agrado. Se recurre a la representación –combinada o no con consultas directas al pueblo soberano– a través de elecciones periódicas. Pero el orden que permite cooperar y la no interferencia no se combinan fácilmente.

En primer lugar, siguiendo a José Nun (2000), históricamente la democracia está sometida a la tensión de procurar ser “el gobierno del pueblo” (en la tradición de Atenas, aunque no fuera totalmente verdadera por exclusión de mujeres, extranjeros y esclavos, como expresión efectiva de la voluntad general) o resignarse a ser, mediante la elección de representantes autonomizados del pueblo, “el gobierno de los políticos” (en la tradición elitista de Esparta). En este orden de ideas se pronunciaba Joseph Schumpeter a mediados del siglo XX: “la democracia significa tan solo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernarle”<sup>1</sup>. Siguiendo la tríada de Lincoln, el gobierno puede ser “del” pueblo y “para” el pueblo, pero difícilmente “por” el pueblo, que no puede ocuparse de gobernar cotidianamente y debe ser gobernado por otros, aunque en este sentido, como observaba Bobbio (1986), no es lo mismo ser gobernado por élites que se imponen o se proponen. El gobierno del pueblo tiene como componente crucial el que éste escoge a sus gobernantes y puede cambiarlos en la elección siguiente o bien mediante mecanismos revocatorios antes del término del mandato, siempre temporalmente delimitado.

La diferenciación entre gobierno del pueblo y gobierno de los políticos incluye la tensión entre democracia representativa y democracia directa, con sistemas políticos basados solo en la representación originada y legitimada periódicamente por el sufragio o bien la combinación de representación con expresiones de democracia directa mediante referendo, iniciativa popular de ley y mecanismos de revocación de los representantes. En palabras de

---

1. Schumpeter (1942).

Adam Przeworski (2010) «la nostalgia de la participación efectiva sigue atormentando a las democracias modernas». El pronunciamiento ciudadano específico y directo en materias diversas de la esfera pública refuerza el autogobierno y fortalece un aspecto medular de la democracia: la soberanía popular. Pero esta afirmación debe ser problematizada en tres dimensiones. La posibilidad de extensión de la participación a través de formas de democracia directa y deliberativa no siempre es factible a partir de una cierta escala de participantes, lo que hace necesaria la representación. Por su parte, la democracia del referendun extiende la decisión colectiva a través del voto directo individual aislado aplicado a múltiples materias, pero es un acto que limita la deliberación, es decir el proceso de decisiones públicas con énfasis en el uso de la argumentación lógica y racional y la posibilidad (que requiere de tiempo y salir de la inmediatez) de aproximación de posiciones a partir de la disposición a convencer y ser convencidos antes que en el mero uso de posiciones de fuerza y de poder. Esto es especialmente relevante para articular intereses diversos en la perspectiva del interés general (en particular asegurar la productividad, eficacia y coherencia de las políticas públicas) y articular las consideraciones de corto plazo con las necesidades del largo plazo (y por tanto establecer prioridades intertemporales). Luego, y es la dimensión más problemática de algunos tipos de consulta referendaria, pueden terminar restringiendo derechos en el caso de la expresión de pulsiones represivas puntual o permanentemente mayoritarias que la representación y la decisión indirecta pueden tener mayores posibilidades de procesar (los ejemplos más importantes en el mundo actual son la intolerancia frente a las minorías étnicas, religiosas o sexuales, las pasiones nacionalistas contra los inmigrantes o el reclamo de castigos extremos frente a transgresiones a la ley, incluyendo la pena de muerte). Incluso formas atenuadas de participación no basadas en la representación electiva de los ciudadanos, como la consulta a los actores sociales organizados para incidir en el proceso legislativo, pueden tener la limitación de contar con representatividades minoritarias o heterogéneas que se limitan a expresar intereses particulares. En palabras de Peters (2007) “es más probable que sean las burocracias públicas o los poderosos actores privados, más que los excluidos y los menos organizados, los que lleguen a tener todas aquellas capacidades necesarias para ser realmente actores efectivos en el proceso de elaboración de las políticas”. Así, la extensión de la participación directa en las decisiones públicas es deseable para ampliar el autogobierno, aunque no sea tan frecuentemente factible ni siempre resuelva todos los problemas

desde el punto de vista de la promoción del interés general, la coherencia de las políticas públicas y la estabilidad de los derechos, en el que la lógica de la representación tiene sus méritos.

En segundo lugar, los gobiernos partidarios pueden representar la voluntad colectiva y mayoritaria de quienes los apoyan, pero las necesarias reglas de separación de los poderes entre ramas centrales (ejecutivo, legislativo, judicial, constitucional), niveles territoriales (nacional, comunal, regional) y eventualmente supranacionales (económicos y eventualmente políticos como en la Unión Europea, hoy día entrampada en su capacidad de representación) hace que en diversas circunstancias los gobiernos no respondan a la voluntad mayoritaria. A este factor institucional cabe agregar el eventual condicionamiento de los representantes por grupos de interés y poderes económicos, condicionamiento que distorsiona o anula representación. Con ello se debilita la legitimidad de la democracia como expresión de la voluntad popular, lo que suscita o bien la abstención (por ejemplo en Chile la abstención electoral llegó a 60% en 2012, en un contexto de instituciones no representativas de la voluntad popular heredadas de la dictadura de 1973-1989) o bien la movilización al margen de las instituciones, que tiene el mérito de cuestionarlas y eventualmente hacerlas evolucionar, o mantener procesos periódicos de cuestionamiento y bloqueo de las instituciones o su desborde. En el caso de grupos con alto poder de negociación, la movilización puede terminar imponiendo intereses específicos en detrimento del interés general en el sentido más arriba definido (siendo los casos del petróleo y la enseñanza en México o del cobre en Chile casos frecuentemente citados). Una democracia de alta calidad que permita el ejercicio efectivo del ideal democrático basado en la voluntad popular supone, cuando es posible, privilegiar la ciudadanía local basada en la democracia directa. Pero además existen esferas de decisión en que la voluntad popular debe formarse más allá de los particularismos, por ejemplo de carácter local, con formas de ciudadanía de escala nacional, supranacional y global, es decir con construcciones institucionales complejas de más difícil control cotidiano por el ciudadano común, que a su vez requiere estar cada vez más instruido e informado en dimensiones que van más allá de lo específico y de lo inmediato. En la decisión democrática el nivel local y subnacional es el primer nivel indispensable del autogobierno, pero sobre diversos temas de interés general, es inevitable cierta centralización nacional para hacer efectivo el ejercicio de derechos (como los políticos y civiles y los económicos, redistributivos, laborales, ambientales). También



tiene cada vez más sentido la construcción de formas estatales supranacionales y esbozos de gobierno mundial para el manejo de la regulación del capital financiero, el control de los tráficos ilegales y la supresión de paraísos fiscales, entre otros temas, como condición de minimización de la influencia del poder económico transnacional sobre el poder democrático nacional. Esta diversificación de instituciones que incide en la decisión pública no debe, sin embargo, ampliarse al punto de hacer imposible la expresión de la voluntad mayoritaria mediante reglas que terminan siendo supermayoritarias, como parece ocurrir actualmente en buena medida en las instituciones de la Unión Europea, que requiere avanzar a una ciudadanía europea con instituciones representativas y de consulta ciudadana con mayor soberanía frente a los Estados-Nación, lo que la actual fractura económica entre norte, sur y este del continente no permite, prologando instituciones híbridas y poniendo en peligro el proyecto de integración europea y la adhesión a la democracia. Esta es una lección para América Latina y del Sur en sus propios proyectos de integración: quedarse a medio camino puede ser una solución catastrófica.

En tercer lugar, las contradicciones de la democracia no se terminan en el problema de la representación y en el del respeto de la voluntad mayoritaria. ¿Es compatible la democracia con niveles significativos de desigualdad económica y social? El Estado debe estructurarse con un principio constitucional-democrático según el cual el poder público o imperium no sea arbitrario y oprima a los ciudadanos, pero también con un segundo principio cívico republicano según el cual el Estado debe plantearse como objetivo la reducción de la dominación que conlleva el poder privado o dominium. La concepción cívica republicana traslada dichos principios a diseños institucionales específicos que faciliten el control por los ciudadanos del poder público, y también a políticas públicas que persigan el establecimiento de un orden social en el que los ciudadanos comunes puedan no estar a merced del poder privado en los ámbitos básicos de la decisión humana.<sup>1</sup> Ya lo decía Rousseau en un pasaje de su Contrato Social: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.<sup>2</sup>

El capitalismo y la democracia han organizado variadas formas de convivencia en la historia, especialmente a través de

---

1 Pettit (2009).

2 Citado por José Nun, op.cit. p. 41.

formas de compromiso como los Estados de bienestar, en el que altos impuestos y gobiernos fuertes permiten socializar diversos servicios a los ciudadanos al margen del mercado y de la acumulación de capital, con sus versiones “maduras” y “periféricas” y con su retroceso en la etapa actual de “capitalismo financiarizado”.<sup>1</sup> En palabras de Pierre Rosanvallon (2012): “Antes de que estallase la Primera Guerra Mundial se inició una transformación silenciosa inspirada por imperativos morales pero también por el miedo a la revolución. Los gobiernos estaban convencidos de que, para evitarla, era preciso emprender reformas sociales que redujeran la desigualdad. A partir de los años 70 del siglo pasado empiezan a cambiar las cosas. Se pasa de un capitalismo de organización a un capitalismo de innovación. Coincide, además, con que el miedo a la revolución desaparece tras la caída del muro de Berlín (...). Al desaparecer el horizonte del igualitarismo tras el fracaso del socialismo de la colectivización, solo sobrevivió la idea de la igualdad de oportunidades. Blair y la tercera vía la colocaron en el primer plano de la reflexión y de la acción de gobierno, pero no definieron una visión social alternativa. Las desigualdades crecieron y, como dijo Rousseau, la desigualdad material no es un problema en sí misma, sino solo en la medida en que destruye la relación social. Una diferencia económica abismal entre los individuos acaba con cualquier posibilidad de que habiten un mundo común”.

Aunque la democracia nace como reacción al creciente poder de la nobleza o la aristocracia, no se caracteriza por la igualdad, salvo la igualdad ante la ley. No se plantea “el deber de participar” sino “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia. Existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental, mientras la expectativa de reclutamiento posterior influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.

Así, si pesa en forma desigual la influencia política de individuos desiguales, se está violando la condición de igualdad política. La concentración de la propiedad genera una influencia desigual o incluso la captura del sistema político por el poder del

---

1 Martner (2009).

dinero. De nuevo en palabras de Przeworski (2010): «la influencia corruptora del dinero es la plaga de la democracia», mientras Castoriadis (2010) subraya polémicamente que “la corrupción de los políticos, en las sociedades contemporáneas, se ha convertido en un rasgo sistémico, un rasgo estructural”. Pero suprimir la propiedad no estatal para terminar con los peligros del poder privado establece una desigualdad radical entre el ciudadano y la burocracia que domina el Estado, y acaba por suprimir toda democracia, según mostró la experiencia del siglo XX.

En este sentido Castoriadis sostiene que en “un régimen verdaderamente democrático se puede intentar establecer una articulación correcta entre tres esferas, preservando al máximo la libertad privada, preservando al máximo también la libertad del ágora, es decir las actividades públicas comunes de los individuos, y que haga participar a todo el mundo en el poder público. Cuando ese poder público pertenece a una oligarquía, su actividad es de hecho clandestina, puesto que las decisiones esenciales se toman siempre entre bastidores”<sup>1</sup>. Las instituciones democráticas parecen enfrentarse a un dilema cada vez más intenso: remitirse solo al juego periódico de distribución del poder entre distintas opciones, pero deslegitimándose por una baja capacidad de producir resultados significativos en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, o avanzar -lo que solo puede hacerse mediante nuevos procesos constituyentes- hacia una nueva combinación de representación no oligarquizada (especialmente mediante límites a la reelección y financiamiento público de las campañas con pérdida del escaño en caso de sobrepasar límites de gasto) y formas de democracia directa y referendaria para resolver materias en las que las instituciones representativas no son pertinentes para la decisión o no gocen de legitimidad suficiente, en especial en la definición de la magnitud y forma de provisión de los bienes públicos que deben y pueden -habida cuenta de los límites en la producción de bienes que emanan de la esfera económica- estar a disposición de la sociedad.

La dimensión procedimental de la democracia parece entonces necesitar expandirse cada vez más hacia una dimensión programática y de producción de resultados en la provisión de bienes públicos y frente a los resultados distributivos de las transacciones de mercado. La dimensión opaca de las instituciones democráticas y la incapacidad de las mismas para producir respuestas prácticas a demandas sociales bloqueadas por poderes económicos rentistas, se

---

1 Cornelius Castoriadis, op.cit.

hace probablemente más evidente en la etapa actual de desarreglos del capitalismo financiero global y también de inclusión en la ciudadanía activa de sectores medios y populares antes carentes de capacidad de expresión y acción colectiva.

## Referencias

- Alesina, Alberto, Perotti, Roberto.** 1994. "The Political Economy of Growth: A Critical Survey of Recent Literature", *The World Bank Economic Review*, 8:3, pp. 351-371.
- Aghion, Philippe; Roulet, Alexandra.** 2011. *Repenser l'État*. París: Seuil.
- Bobbio, Norberto.** 1986. *El Futuro de la Democracia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Castoriadis, Cornelius.** 2010. "El Individuo Privatizado", en *Utopías*. Santiago de Chile: Aún Creemos en los Sueños.
- Dahl, Robert.,** 2006. *La Democracia. Una guía para los ciudadanos*. México: Taurus.
- Habermas, Jürgen.** 2009. "¿Tiene aún la democracia una vocación epistémica?", en *¡Ay Europa!*. Madrid: Editorial Trotta.
- Martner, Gonzalo D.** 2009. *La Crisis y el Estado Activo. Una visión desde América Latina*. Extremadura: Colección Pensamiento Iberoamericano, Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica.
- Nun, José.** 2000. *Democracia: ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Persson, Torsten; Tabellini, Guido.** 2007. "The Growth Effect of Democracy: Is It Heterogeneous and How Can It Be Estimated?" *NBER Working Paper* No.13150, June.
- Peters, B. Guy.** 2007. "Globalización, Gobernanza y Estado: Algunas Proposiciones Acerca del Proceso de Gobernar", *Reforma y Democracia*, 39, pp. 103-115.
- Pettit, Philip.** 2009. "Program for a Progressive Politics: a Discussion Note", *Discussion Papers*, Fundación Ideas, Madrid.
- Przeworski, Adam.** 2010. *Qué Esperar de la Democracia*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Rosanvallon, Pierre.** 2012. "Una diferencia económica acaba con la convivencia", disponible en [http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/23/actualidad/1351011572\\_284875.html](http://cultura.elpais.com/cultura/2012/10/23/actualidad/1351011572_284875.html).
- Sartori, Giovanni.** 2009. *La Democracia en 30 lecciones*. Madrid: Taurus.
- Schumpeter, Joseph.** 1942. *Capitalism, Socialism and Democracy*. Nueva York: Cambridge University Press.